

**P. 111.794 - "M.
J. L. s/ Recurso
extraordinario de
inaplicabilidad de ley en
causa N° 8.313 de Cámara
de Apelación y Garantías
en lo Penal -Sala Primera-
Bahía Blanca".**

///PLATA, 13 de julio de 2011.

AUTOS Y VISTOS:

La presente causa P-111.794, caratulada "M. J. L. s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 8.313. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- Bahía Blanca",

Y CONSIDERANDO:

1. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de mayo de 2010, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 de Tres Arroyos y -en consecuencia- revocó la libertad de J. L. M., dispuesta por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 -con sede en la referida localidad-, conjuntamente con la imposición de las medidas cautelares previstas en el art. 42 de la ley 13.634.

Asimismo, la Cámara dispuso atenuar los efectos de la prisión preventiva sufrida por el encartado disponiendo su pase a un régimen de semi libertad en una institución cercana a su domicilio, para que se profundicen los estudios de personalidad y se trabajen los vínculos familiares a fin de posibilitar su reinserción social (fs. 107/109).

2. Contra esta decisión el señor Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 146/164).

Indicó el recurrente que la resolución recurrida es equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, al mantener la privación de la libertad del joven con anterioridad al fallo final de la causa. En su defecto, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 482 del C.P.P. Requirió también tal declaración respecto del art. 494 del C.P.P. si esta Corte excluye las garantías constitucionales de la categoría de "ley sustantiva" para los supuestos de inobservancia o errónea aplicación de la ley de fondo.

Denunció la arbitrariedad del reiterado criterio restrictivo sostenido por el Tribunal de Casación en materia recursiva de medidas de coerción dictadas sobre niños, en tanto ha denegado sistemáticamente su intervención (fs. 146/150). Preciso que la postura de que no resulta competente para revisar las medidas de coerción impuestas a niños y adolescentes cercena el acceso a la doble instancia de revisión consagrado en los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 8 inc. 2 ap. h de la CADH y 14 inc. 5 del PIDCP, que contemplan el derecho de todo imputado a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Agregó que "...sabiendo de antemano el resultado que tendría la interposición del -a [su] juicio correcto-recurso de casación... y, a fin de evitar una demora en la causa que indefectiblemente perjudicará aún más la situación de [su] asistido, es que interpon[e] directamente recurso ante [esta Corte] a fin de que despejen las vías recursivas, cuya negación afecta, no solo a M. sino a todos los jóvenes detenidos de la Provincia de Buenos Aires que ven vulnerado su derecho a obtener la revisión de

conformidad con los estándares fijados por la Corte Federal de las medidas de coerción dictadas en su contra. Afirmó que del texto del art. 61 de la ley 13.634 no se deduce que se encuentre vedada la instancia de casación en las medidas de coerción. Para el caso que esta Corte no lo entendiera así, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de dicha norma.

En definitiva, requirió que esta Corte fije doctrina en el asunto y disponga el reenvío de los autos al Tribunal de Casación para que trate el recurso de inaplicabilidad como recurso de casación (fs. 151/160).

Por otro lado, calificó de arbitraria la revocatoria de libertad resuelta por la Cámara de Apelación y Garantías. Sostuvo que la decisión, además de escueta, no constituye derivación razonada del derecho vigente, sino simples afirmaciones dogmáticas sin sustento legal alguno. Por ello, solicitó que -de no acogerse el planteo efectuado en cuanto a que corresponde intervenir al Tribunal de Casación- esta Corte trate el fondo del tema -aún en el caso de tornarse abstracta la cuestión- en función de los principios de economía y celeridad procesal (fs. 160/164).

3. El recurso extraordinario en examen fue articulado en término por quien se encuentra legitimado para ello. En torno a la definitividad del pronunciamiento impugnado, cabe recordar que el art. 494 del Cód. Proc. Penal -texto según ley 13.812- establece que el remedio allí previsto sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal elaborada sobre la misma, revoque una sentencia absolutoria o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años. En el caso, la resolución por la que se revocó la libertad concedida al menor en la instancia originaria (apartado 1.) debe

equipararse a sentencia definitiva. Efectivamente, tiene dicho esta corte -en armonía con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación ("Fallos", 314:791, 316:1934, 317:1838, 320:2080, entre muchos otros)- que las decisiones que restringen la libertad con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionan al imputado un gravamen que podría resultar de imposible o tardía reparación ulterior, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata (doctrina del art. 482 del Cód. Proc. Penal; Acs. 95.296 -4/X/2006, 100.512 -31/X/2007, 102-875 -5/XI/2008- entre numerosos precedentes).

De acuerdo a la reseña del considerando 2., el impugnante planteó en primer lugar una cuestión federal cuyo tratamiento liminar -por recaer sobre un elemento de la admisibilidad del recurso- se impone, a saber, si el presente proceso ha transitado por las instancias necesarias para tener por abastecida la garantía de igualdad ante la ley del menor sometido a juicio.

En torno al alcance de dicha garantía en materia penal juvenil este Tribunal tiene enunciado el principio rector conforme al que "las garantías vigentes para enjuiciar a los mayores son un umbral mínimo que debe tomarse como punto de partida para, de ser necesario, complementarlo con engranajes específicos de tutela de la situación de la minoridad" (doct. causas N° 77.949 -sent. del 16-III-2007- y 80.933 -sent. del 21-III-2007-, entre otras muchas posteriores de la Suprema Corte provincial).

Esta posición también ha sido sostenida por la Corte Federal en la causa M. 1022. XXXIX. Recurso de hecho deducido a favor del D. E. M., fallo del 7-XII-2005. Se la enunció de la siguiente manera: "Que, partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante, de que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los

adultos, no debe perderse de vista que de dicho principio no se deriva que los menores frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos." Y que "lo contrario implicaría arribar a un segundo paradigma equivocado (...) de la justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos que el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que derivando su condición de persona en desarrollo". En suma, concluyó que "los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos. Y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párr. 54).

De tal manera que no está en discusión que - conforme a la doctrina de esta Corte y de la Corte Suprema de Justicia Nacional- el techo de garantías y derechos de que goza el mayor procesado representa el piso de las condiciones de enjuiciamiento del menor.

Entonces, aunque este Cuerpo ha dicho reiteradamente que "una interpretación coordinada de los artículos 59, 60 y 61 de la ley 13.634 con el art. 20 de la ley 11.922 -texto conforme ley 13.812 (B.O. 21-IV-2008)-, que no incluye el acceso al Tribunal de Casación en estos casos, lleva a concluir que la vía recursiva prevista en dicho marco normativo es la indicada en el libro IV, título VI del Código Procesal Penal relativa a los recursos extraordinarios locales" (conf. Ac. 106.383, res. del 13-V-2009), corresponde repasar las vías recursivas previstas para mayores en supuestos como el de autos en el Código Procesal Penal -texto según ley 11.922 y sus

modificatorias-, como paso previo a determinar si - atendiendo a la premisa ya señalada de que los niños y jóvenes deben contar, cuanto menos, con las mismas garantías procesales que los adultos- tal régimen es insuficiente a los fines de asegurar la realización de dicha garantía.

En tal faena, y sin pretender agotar el análisis del conjunto de casos posibles vinculados con la intervención del Tribunal de Casación Penal, lo cierto es que esta Corte ha señalado que en el esquema recursivo previsto para procesados mayores en la ley 11.922 y sus modificatorias, el art. 450 del C.P.P. incluye entre las resoluciones recurribles ante el Tribunal de Casación a "los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución" (P. 109.270, res. del 18,VIII, 2010), al menos sin controversia cuando la resolución recurrida revocó una anterior que disponía su libertad durante el proceso o se hallare en juego una cuestión de raigambre federal.

La resolución recurrida, por la que la Cámara del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la libertad del menor concedida en la instancia originaria (ver considerando 1.), encuadra en esa categoría, con lo que resulta merecedora del examen que habilita el art. 450 del C.P.P.

4. Como recién a través de la presente se dilucida -conforme a los fundamentos expuestos- cual es la vía recursiva que deberá utilizar el impugnante en hipótesis como la presente, el criterio jurisprudencial ahora adoptado no puede configurar un obstáculo para que sean atendidos los agravios de la Defensa.

Corresponde, entonces, a los efectos de no contrariar el criterio explicitado ni vulnerar los derechos de los recurrentes, remitir los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca para que, a partir de la notificación de su radicación en ella, puedan los interesados hacer valer sus derechos interponiendo, si así lo consideraren, el recurso de casación al que alude el art. 448 del Código Procesal Penal, según ley 11.922 y sus modificatorias.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia,

RESUELVE:

Remitir los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca para que, a partir de la notificación de su radicación en ella, puedan los interesados hacer valer sus derechos interponiendo, si así lo consideraren, el recurso de casación al que alude el art. 448 del Código Procesal Penal, según ley 11.922 y sus modificatorias.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

Fdo: Dres. Eduardo Néstor de Lázzari, Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters. *Ante mí:* R. Daniel Martínez Astorino, Secretario.